

MARIANO FERREYRA
LA LUCHA CONTINUA

AL TRABAJO Y AL SALARIO LOS DEFENDEMOS LOS TRABAJADORES

DECRETO TARDÍO Y LIMITADO



Ilustración: Iconoclastas

Cada día que pasa muestra la contradicción entre los intereses de los trabajadores y patrones en esta pandemia.

Ya la cuarentena fue precipitada por el abandono de tareas por trabajadores en todo el país.

Con la inevitable extensión de la cuarentena, las patronales se largaron a nuevos aprietes, vaciamientos de empresas y despidos masivos. También reducciones de salario, no pagos, pagos en cuota y suspensiones.

La necesidad de frenar los despidos estuvo planteada por trabajadores en todo el país. En primerísimo lugar por el Partido Obrero y el Frente de Izquierda.

El DNU del gobierno cierra por 60 días los despidos entre la mayoría de los trabajadores formales. Expresa la conciencia

en el gobierno de que si no toma una medida, la tendencia a un choque entre los trabajadores y las patronales va a ocupar el centro de la escena.

Pero, siguen en la calle los miles de despididos. Tampoco van a ser amparados trabajadores de servicio doméstico, construcción y rurales.

La voracidad patronal no se ha frenado con el decreto. Patronales y burócratas sindicales ya están pactando suspensiones y reducciones salariales. Se prepara un paquete de subsidios patronales a costa de los fondos jubilatorios.

La posibilidad de defender nuestras condiciones de vida sigue estando en la acción común de los trabajadores. Defendamos en cada punto del país, un programa de emergencia:

- Preservar los puestos de trabajo y el valor real de los salarios, indexados con la inflación.
- Seguro universal de 30.000 pesos.
- Sumar a la prohibición de despidos y suspensiones la reincorporación de los despididos al 29 de febrero. Continuidad de las empresas que cierren a cargo del Estado, bajo control obrero.
- Centralizar todo el sistema sanitario, público, privado y de obras sociales, bajo un comando único para combatir la pandemia.
- Comisiones obreras de seguridad e higiene que controlen la implementación del plan de emergencia en todos los lugares de trabajo del país.
- No pago de la deuda y nacionalización de los hidrocarburos, volcando todos los recursos a combatir la pandemia y sus efectos sociales.

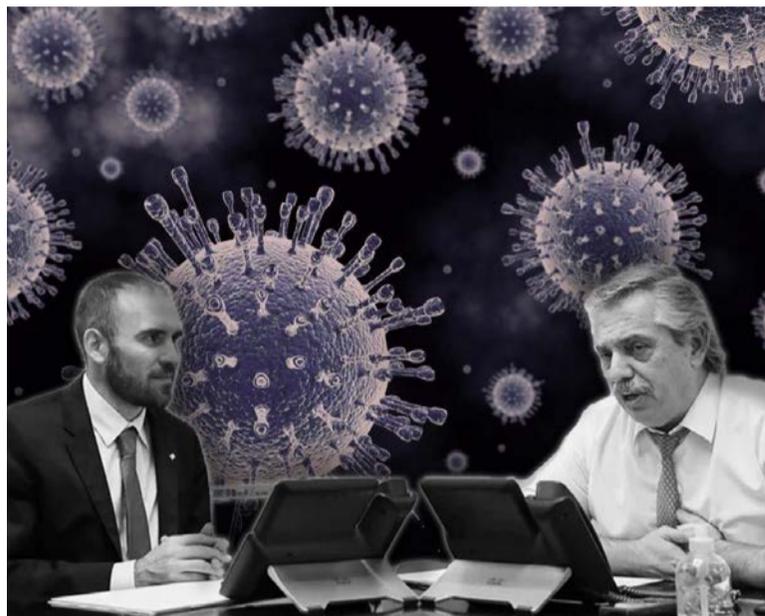
El gobierno paga a los bonistas el equivalente a 25.000 respiradores

Son cerca de 250 millones de dólares en vencimientos de intereses

El 31 de marzo había sido fijado originalmente como la fecha límite por el gobierno de Alberto Fernández para cerrar una renegociación de la deuda con el FMI y los bonistas. Si bien la crisis detonada por la pandemia cambió sustancialmente el escenario, el Presidente volvió a declarar que aspiran a evitar un default. Mientras se espera que el ministro Martín Guzmán haga pública una propuesta de reestructuración de casi 70.000 millones de dólares, el gobierno pagó a los bonistas con reservas internacionales, cerca de 250 millones.

Se trata de dos cupones de intereses. Uno por 224 millones del bono Par, que fue emitido tras el canje para pagar la deuda que había sido defaulteada en 2001, y el resto corresponde a Letes, que habían sido reperfiladas por el gobierno de Macri en septiembre pasado. La suma de los montos es equiparable a la compra de 25.000 respiradores artificiales, que podrían reforzar el sistema sanitario en crisis, y es 14 veces lo asignado por el gobierno como partida especial para salud en marzo.

Todo este esfuerzo para evitar el default -que se complementa con aproximadamente 150.000 millones de pesos pagados a los acreedores de la deuda local desde que comenzó el



Se han pagado 150.000 millones de pesos a los acreedores de la deuda local desde que comenzó el año

año- podría, sin embargo, no ser suficiente para evitar una cesación de pagos. La fecha crítica que se avizora ahora es el 22 de abril, cuando vencen otros 500 millones de dólares.

Las complicaciones no solo derivan de las disputas por cuál va a ser la quita o los plazos sobre los bonos reestructurados en poder de los bonistas (ya que sobre los 44.000 millones que debe al FMI no se estarían negociando recortes).

El aspecto crucial es que los tenedores de bonos desconfían de la capacidad de pago de la Argentina, siendo que las nuevas proyecciones arrojan que el PBI nacional se contraería hasta un 6,7%. A ello hay que sumar la caída de la recaudación, no solo por menor actividad sino además por los rescates a los capitalistas; un ejemplo es que se estudia modificar las retenciones petroleras, para pasar

del 12% actual a un esquema móvil que eximiría de gravámenes las exportaciones en caso que el precio del barril caiga por debajo de los 30 dólares.

Reflejo de esta desconfianza es que la cotización de los bonos ya cayó por debajo del 30% de su valor nominal, algo que no sucedía desde el default de 2001. Estamos ingresando en zona de fondos buitres, no solo por lo barato de los bonos sino también porque las inyecciones de liquidez de la FED y el Banco Central Europeo, con tasas 0 o negativas, convierten la especulación de los buitres en un negocio extraordinario. Por otro lado, la caída en la cotización de activos que ofrecen garantías mucho mayores de pago pueden estimular a los actuales tenedores a vender sus posesiones argentinas para pasarse a inversiones más seguras.

El bajo nivel de operaciones no evidencia todavía que los fondos buitres estén comprando masivamente bonos argentinos, pero un empantanamiento de la negociación podría decantar rápidamente en un cuadro de este tipo. Por otro lado, como sugiere un especialista (*Clarín*, 29/3), la atomización de tenencias plantea la posibilidad de que con una posición no muy

grande, ciertos fondos puedan bloquear un acuerdo, como hizo Fidelity en enero cuando forzó a Kicillof a pagar al contado 277 millones de dólares por el BP21.

Las consecuencias de este rescate de una deuda quebrada no solo se expresan en el consumo de los recursos fiscales y cuasi fiscales (los adelantos del BCRA) sino, además, en el salvataje que se lleva adelante con los fondos de la Anses. En estos días, el gobierno volvió a enchufar nuevos bonos al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para evitar pagarle vencimientos, y el mes que viene haría lo mismo con otros vencimientos por 2.300 millones de dólares. Este camino fue allanado con la ley de emergencia sancionada en diciembre, que permite aumentar las tenencias en bonos públicos del 50 al 70% del FGS. Producto de estas operaciones, este fondo ya perdió el 50% de su valor en los últimos dos años.

La crisis sanitaria promete agravarse al compás del pago de la deuda externa usuraria y fraudulenta. Más que nunca, planteamos la investigación y el no pago a los especuladores.

Iván Hirsch

¿Vuelven los patacones a la provincia de Buenos Aires?

Los salarios en la mira

Como hemos señalado en diferentes oportunidades, la llegada del coronavirus a la Argentina ha puesto en la superficie la situación de quebranto generalizado de las cuentas nacionales y provinciales, producto del beneficio financiero que se le otorgó durante años a los especuladores de la deuda pública. Llegado el momento de enfrentar una situación sanitaria excepcional, ni el país ni la provincia de Buenos Aires cuentan con los recursos para enfrentarla. La cuarentena, extendida hasta el 12 de abril, es entendida por el gobierno como el único recurso disponible para enfrentar la pandemia, con la conciencia que el avance del virus en el Gran Buenos Aires podría producir un desastre sanitario. Como hemos señalado en *Prensa Obrera*, la municipalización del sistema de salud en la provincia ha producido un desfinanciamiento sin precedentes y, por lo tanto, una situación de desprotección al

conjunto de los trabajadores bonaerenses. En este marco, el gobierno nacional se dispone a pagar intereses de deuda por 250 millones de dólares y 1.850 millones de pesos.

Los mismos municipios, que son corresponsables de la situación hospitalaria, han amenazado con reducir el salario de todos sus trabajadores, aduciendo una caída de la recaudación municipal producto de la cuarentena. Sumado a esto, han señalado la imposibilidad de hacerse de los pesos que representan los títulos de deuda de la provincia que fueron "inducidos" a comprar. Es decir, si los municipios quisieran usar esos pesos para pagar los muy magros salarios no podrían hacerlo, ya que la provincia no tendría los pesos para cubrir esa deuda. Frente a esta situación, los intendentes proponen bajar los salarios y que la provincia emita patacones para hacer frente a otros pagos a proveedores y lo que paga-

rían a los trabajadores. La propuesta, por un lado, da cuenta de la situación de quebranto generalizado de las cuentas provinciales que son precedentes a la aparición del virus y el beneficio a los especuladores frente a las tremendas necesidades de la población bonaerense. Recordemos que hace algunos meses, Kicillof "amenazó" con no pagar el vencimiento de deuda, cediendo finalmente frente a los grupos de inversión capitalistas, en este caso, el fondo Fidelity.

Este reclamo de los intendentes es la continuidad de los choques y la crisis política con el propio Kicillof. Mediante estas exigencias y denuncias buscan que el gobierno nacional otorgue directamente a los municipios mayor presupuesto, "puenteando" al gobernador. Cualquier emisión de cuasimonedas de la provincia de Buenos Aires debería contar con el acuerdo del Tesoro nacional, ya que, luego

de un período, deberían poder cambiarse por pesos. Por supuesto, la emisión de una cuasimonedas en la provincia más grande del país sería el comienzo de un "efecto dominó" de reconocimiento de quiebras provinciales y, finalmente, del default de las cuentas nacionales. Esta tentativa sigue siendo analizada en Chubut, que se encuentra en la primera fila de las provincias en quiebra.

La pandemia llega a la provincia donde las necesidades más elementales de un enorme porcentaje de la población se encuentran insatisfechas. La situación en los barrios levanta temperatura frente a la imposibilidad de realizar changas y ganarse el sustento cotidiano de miles de desocupados que pueblan los barrios bonaerenses. El 35% de la población no cuenta con cobertura de salud y es la más desprotegida frente al virus que amenaza en los barrios populares, donde las fami-

lias trabajadoras han sido forzadas a vivir en el hacinamiento. Sumado al intento de reducir drásticamente los salarios de los trabajadores municipales, el gobierno prepara un recorte salarial para los trabajadores en relación de dependencia, sumando nuevos beneficios a las patronales que ya cuentan con exenciones de todo tipo.

Más que nunca está planteada la organización del conjunto de los trabajadores de todos los municipios para rechazar cualquier recorte salarial. Está presente la necesidad de hacerle frente a quienes nuevamente pretenden descargar la crisis sobre los trabajadores. Repudio y no pago la deuda usurera provincial y nacional. Ningún recorte salarial. Centralización de todo el sistema de salud público y privado para atender las necesidades de toda la población.

Juan Pablo Rodríguez



Rescatan al capital con plata de la Anses

MIGUEL BRAVETTI

Los despidos masivos, no sólo en Techint, y la imagen de multitudes apiladas en torno de los cajeros para poder cobrar el "plus" para las AUH y las jubilaciones en La Matanza y Quilmes resumen los dos aspectos más explosivos de la situación, mientras avanza la epidemia.

Los distritos pobres del conurbano bonaerense incuban conflictos sociales de alcances imprevisibles, que la asistencia oficial actual difícilmente logrará contener. El Comité de Emergencia, convocado por el gobierno -que reúne a las iglesias católica y evangelistas, los intendentes y las organizaciones sociales integradas al gobierno- tendrá la tarea de administrar recursos muy insuficientes, tal como denuncia el Polo Obrero y el Frente de Lucha Piquetero. Los saqueos y llamados a salir a las calles que estallaron en el empobrecido sur de Italia adelantan lo que podría ocurrir en nuestro país, aunque multiplicado por diez, si no se toman las medidas apropiadas.

El anuncio de Techint, por su parte, fue un inequívoco mensaje, compartido por todo el arco patronal, para que el gobierno priorice el auxilio a la industria. Igual que ocurrió en Italia, los capitalistas presionan por poner en marcha la producción, argumentando que la quiebra económica tiene efectos más nocivos que la pandemia.

Prohibición de despidos y rescate al capital con plata del Anses

La lista de despidos es interminable: tercerizados de la empresa GPS, que prestan servicios para aerolíneas; 56 trabajadores estatales de Educación de La Plata; un centenar de empleados de Vía Bariloche; 60 trabajadores de la cadena de cines Cinemark; más de un centenar de gráficos y periodistas de Publiexpress e Ipesa; 745 operarios de la planta electrónica Mirgor en Río Grande, propiedad de Nicolás Caputo; 800 trabajadores de la minera Livent, entre muchos más.

De este modo, las patronales presionan para que se ponga fin a la cuarentena lo antes posible y se avance con la implementación de un programa que incluya el pago de salarios por parte del Estado o líneas de crédito subsidiadas, exenciones impositivas y la eximición de contribuciones patronales.

El DNU que dispone la prohibición de despidos y suspensiones "sin justa causa o por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor" por un período de 60 días, carente de efecto retroactivo, es una medida ultralimitada porque deja afuera a todos los que ya fueron despedidos y a los trabajadores informales. Las empleadas domésticas, obreros de la construcción y rurales en negro son millones, deben ser incluidos con garantía de estabilidad laboral.

La contraparte será, según difundió el



El gobierno impulsa un amplio plan de apoyo a las empresas financiado con la plata de los jubilados

diario *Clarín*, un amplio plan de apoyo a las empresas, que incluye la postergación de los vencimientos para el pago de las contribuciones patronales y una disminución de hasta el 95% para abril en el caso de las empresas de menos de 60 trabajadores. Por otra parte, se dispondría una Asignación Compensatoria al Salario mediante una suma no remunerativa a las empresas con menos de 100 trabajadores (que varía entre un salario mínimo y la mitad) que podrá tomarse como parte del pago de los salarios. Además, por medio de Repro, se pagará una asignación no contributiva de entre 6 y 10 mil pesos a trabajadores de empresas de más de cien empleados y se aumenta el fondo de desempleo. Según los trascendidos, las empresas que adhieran a estos programas tendrán que reincorporar los trabajadores despedidos hasta el 29 de febrero.

Pero no es el Tesoro el que pone estos fondos, es la Anses -o sea, los jubilados; o sea, los propios trabajadores. Eximen de aportes y financian salarios con plata de la Anses; el saqueo a los jubilados no tiene antecedentes. Debemos rechazar semejante vaciamiento, mientras se siguen pagando los vencimientos de la deuda.

Defensa del salario

Las patronales también reclaman la reducción salarial o el pago en cuotas. Algo que ya adelantaron grandes empresas como la aerolínea Latam, el multimedio "La Capital" de Mar del Plata, la avícola Tres Arroyos, el Grupo Indalo de Cristóbal López, el Grupo América, varias automotrices y petroleras. "No se puede tener paralización de actividades a salario pleno y, además, esto implica sobrecostos muy grandes e imposibles de afrontar desde el punto de vista financiero", sintetizó el vicepresidente de la UIA y titular de la poderosa cámara de empresas alimenticias, Funes de Rioja.

El burócrata petrolero Guillermo Pereyra una vez más hizo punta (fue el primero en firmar convenios flexibilizados; lo que le granjeó el elogio del "candidato" Alberto

Fernández) y acordó el pago de un 70% de los salarios "de forma no remunerativa para que las empresas no tengan que afrontar los aportes patronales". Antes, Pereyra decidió suspender la discusión paritaria. De este modo le marcó la cancha al conjunto de la burocracia sindical. Héctor Daer también se mostró dispuesto a secundar a las patronales y propuso que "se arme una mesa y se analice cómo se va pagar a quienes hoy están impedidos de trabajar". Precisamente el DNU da vía libre a las direcciones sindicales y a las patronales para pactar suspensiones y recortes de salarios, sin el pago de cargas y otros conceptos.

La campaña contra las dietas exorbitantes de los legisladores, impulsada por el macrismo, será utilizada como antecedente para justificar una reducción general. El economista de la consultora Fiel, Daniel Artana, sostuvo que "cortar los sueldos de los políticos suena bien pero no alcanza" y reclamó que el sector público resigne parte de sus salarios para evitar una crisis mayor.

Un programa del movimiento obrero tiene que plantear que no haya ningún recorte, que se respeten los acuerdos paritarios preexistentes y que mientras dure la cuarentena y no haya paritarias, se mantenga el poder adquisitivo del salario, actualizando las escalas con los índices de costo de vida del Indec.

Volvamos al Fondo, parte 2

La recaudación de enero y febrero cayó un 5,2% en términos reales y se calcula que ese porcentaje podría duplicarse en marzo y abril; máxime si se suspenden los vencimientos tributarios y se reducen las retenciones petroleras como reclaman las operadoras (para atenuar el derrumbe del barril).

¿Cómo hará el quebrado Estado argentino para financiar el plan de los capitalistas?

Con más emisión monetaria. Sin estrictas medidas de control, como la apertura de los libros y el control obrero de las cadenas de comercialización y de la industria

de la alimentación, supone un alto riesgo hiperinflacionario.

Echando mano a la caja de la Anses y preparando el terreno para un nuevo golpe a la movilidad.

Con más deuda. Contrariando "el relato" Alberto Fernández se negocia secretamente una línea de financiamiento con el FMI denominada Derechos Especiales de Giro; destinada a cubrir necesidades ante catástrofes naturales o emergencias sanitarias. Se trata de un crédito de entre 3.000 y 3.500 millones de dólares.

Un programa para enfrentar la catástrofe

En medio del derrumbe económico, el gobierno acaba de hacer otro pago a los bonistas de unos 250 millones de dólares y otro de 1.850 millones en pesos, y anunció que continuará el diálogo para reestructurar la deuda de casi 70 mil millones de dólares.

1) Se deben anular de manera unilateral todos los pagos de deuda, tanto a bonistas como a organismos multilaterales, para volcar todos los recursos a la lucha contra la pandemia y sus secuelas sociales.

2) La defensa de los puestos de trabajo y de los salarios, con cláusulas de actualización automática y un seguro universal para todos los trabajadores que no tengan ingreso alguno de 30.000 pesos, son cuestiones vitales.

3) La prohibición de despidos y suspensiones debe incluir la reincorporación de todos los despedidos desde el 29 de febrero, incluyendo los trabajadores en negro, con su sola denuncia. Esto, por lo menos hasta fin de año, porque el plazo de 60 días permite todo tipo de maniobras para despedir igual. Además ¿qué pasa con las empresas que cierran? Reclamamos su continuidad incondicional a cargo del Estado, bajo control obrero.

4) Hay que centralizar de todo el sistema de salud -estatal, privado y de obras sociales- bajo un comando único para su utilización masiva, sin distinción de cobertura. Hay que reconvertir parcialmente las industrias no esenciales para la fabricar elementos e insumos sanitarios. Hay que nacionalizar la banca para terminar con la especulación y los negocios financieros, y asegurar créditos baratos para la producción, la vivienda y todas las necesidades de los trabajadores. Hay que nacionalizar los hidrocarburos, la minería y los recursos estratégicos, sin indemnización alguna, para abastecer un plan económico de los trabajadores de salida a la crisis.

5) Llamamos a organizar comisiones obreras de control y ejecución de las medidas de seguridad, independientes de la burocracia sindical, en todos los lugares de trabajo. En la salud, en las áreas esenciales y, desde la cuarentena, con los medios disponibles en el resto del movimiento obrero.

¡Derrotemos la pandemia luchando contra el capitalismo!

“Las condiciones mínimas de seguridad para este momento no están dadas”

Entrevista a una de las trabajadoras de la alimenticia Mondelez Pacheco

—¿Cómo es la situación actual en la fábrica? ¿Están fabricando productos esenciales?

—La fábrica nunca dejó de producir. Aumentaron la producción con productos exclusivos para exportación. Durante estas 2 semanas solo se fabricaron galletitas y por ahora solo dulces (Oreo, Pepitos, Lincoln, Variedad y Galletas de arroz) y en la parte de chocolates se fabricaron alfajores, Rhodesia, Tita y habanitos. Yo no creo que estos productos sean esenciales. No fabricamos fideos, por ejemplo. Antes sí, pero Mondelez hace 5 años dejó de fabricarlos en la planta de Pacheco.

—¿Cuántos trabajadores hay aproximadamente? ¿Es la cantidad habitual?

—La cantidad de trabajadores no es la habitual. Están licenciados los que están en el grupo de riesgo. También se licenció a las madres que tienen hijos menores de 17 años. Para cubrirlos, la empresa les ofrece a los trabajadores hacer horas extras. La gente está trabajando 12 horas los días de semana y los fines de semana está yendo a trabajar.

—¿Qué medidas de seguridad e higiene implementa la patronal? ¿Son suficientes?

—Las medidas de seguridad para fabricar alimentos son lavarse las manos y usar alcohol en gel. Pero en estos momentos alcohol en gel no hay más. Estuvimos trabajando la primera semana sin elementos básicos de protección, no teníamos algo tan fundamental como guantes.

La empresa de limpieza se tercerizada y no dan abasto. Nosotros pasamos por muchas puertas las cuales tienen cortinas de plástico, por muchas escaleras, muchos picaportes y pasamanos. Nadie los limpia.

La empresa la única medida nueva que implementó fue la de tomar la temperatura corporal en la entrada del turno. Luego fabricó una cámara que hasta el sábado solo se probó con gente, donde te baña con alcohol al entrar a la planta y lo hace con nuestra ropa de calle puesta. Esta cámara no está reglamentada por nadie. Por otro lado, la empresa ofreció micros para el personal de planta ya que solo una parte estaba autorizada a viajar en ellos. Pero no así a los tercerizados como el personal de las empresas de limpieza, del comedor, ni a la vigilancia. Tampoco los changarines

que trabajan en depósito, ni al servicio médico tercerizado.

Las condiciones mínimas de seguridad para este momento no están dadas.

—¿Qué falta?

—Nos falta alcohol en gel, más dispensers de jabón para lavarnos las manos. Son muchas las veces que en vestuarios no hay jabón. Ahora nos dan guantes, pero están restringidos y nos dicen que hay que cuidarlos. Pero nosotros nos cambiamos muchas veces los guantes porque fabricamos alimentos y los tenemos que tirar ya que no podemos volver a usar.

No nos dan barbijos, salvo a ciertos sectores que se usan por los polvos, gases y olores que tienen los ingredientes. Están restringidos para el resto de nosotros. También dicen que los tienen que cuidar porque la empresa no tiene stock.

Hay carteles que dicen que tenemos que mantener distancia entre nosotros, pero en los cambios de turno se forma un embudo de gente en los pasillos. En la entrada y salida la seguridad toca todas nuestras pertenencias, como la mochila, cartera y bolsos, a todos los que ingresamos a la planta con los mismos guantes.

—¿Qué postura tiene el sindicato sobre la situación? ¿Hicieron asamblea general del personal o sector?

—El sindicato no hace asamblea. Los delegados tampoco. Solo hicieron un turno. Lo que ellos dijeron fue lo de las licencias y los micros. La postura que tiene el sindicato es asegurar la producción de la empresa, solo eso. La gente en esta situación tuvo que ir a hacer horas extras, cuando hace un par de meses la fábrica supuestamente no vendía nada y nos estaban por suspender.

La empresa juega con la necesidad de la gente dando horas extras. Y el sindicato y los delegados pidieron un bono para los que estamos yendo a trabajar. Nos exponen porque la gente viene de lejos: zona sur, zona norte, zona oeste. Hacemos el esfuerzo de no faltar, no llegar tarde, para fabricar Oreo o Pepitos a costa de nuestra salud.

La salud de nosotros los trabajadores y nuestras familias no se negocia, y vale mucho más que los 10 mil pesos que está negociando el sindicato. Nuestras vidas no tienen precio.

Agustina, del INTI

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Los reclamos de residentes y concurrentes frente a la pandemia

Reunión de la Asamblea con funcionarios



El año pasado, los residentes derrotaron el proyecto de ley que regularizaba la precarización laboral

El 30 de marzo se realizó una reunión entre el Ministerio de Salud, a cargo del subsecretario de Planificación Sanitaria, Daniel Ferrante, y la Asamblea de Residentes y Concurrentes de la Ciudad. Esta reunión fue pactada desde febrero, producto de la lucha que impulsamos los residentes y concurrentes por nuestros derechos en diciembre pasado. Días previos, la Asamblea se reunió y reorientó la reunión hacia la problemática central del Covid-19, presentando un comunicado de dos páginas, exponiendo un programa de conjunto para enfrentar la pandemia. El mismo señalaba la necesidad de la centralización del sistema de salud bajo tutela estatal, la reorganización de tareas, aumento de personal, requerimiento de insumos, protocolos centralizados, el salario y derechos laborales para concurrentes y la reducción de la jornada laboral con el pago de guardias extras a los residentes. También la gratuidad del transporte, la eximición del pago de ganancias y el pase a planta de todo el personal, así como la inclusión a la carrera profesional de Enfermería. La respuesta del ministerio no se hizo esperar, pero resultó alejada de la realidad de los hospitales porteños, ya que ofertaban el otorgamiento de la comida y un seguro de

accidentes personales ampliado a los 1.440 concurrentes, que hoy levantan entre sus planteos ser reconocidos como trabajadores con un salario, obra social y ART. Perpetuando la explotación y el trabajo gratuito, ofrecieron chaucha y palitos.

Los concurrentes habían elaborado un comunicado particular, exponiendo sus intenciones de volver a trabajar, pero siendo considerados trabajadores, y en donde resolvían no hacerse presentes hasta tanto no se garanticen sus derechos, medida que generó malestar en las direcciones de hospitales, que impulsaron aprietes para instarlos a volver a las sedes. El gobierno aseguró que pueden continuar ausentándose sin represalias. Es decir, se dan el lujo de perder 1.440 trabajadores de todas las disciplinas en medio de una pandemia. Queda claro dónde están puestos sus intereses.

Al conjunto de propuestas y reclamos, las respuestas faltaron o fueron ambiguas. Ferrante dijo que estaban comprados los insumos habituales, pero que hay limitantes por la inflación. A la falta de respiradores le contrapuso el argumento del bloqueo de compra por parte del gobierno nacional. En cuanto a protocolos y capacitación, se com-

prometieron a trabajar en eso, sin ningún plan ni fechas. Contrariamente al desamparo y falta de organización que denuncian los trabajadores, instaron a la Asamblea a participar de los comités de crisis ya conformados en los hospitales, donde priman las voces directivas pero sin una reorganización y lle-

gada al conjunto del personal.

Por último, dejaron entrever la posibilidad de contratos transitorios para residentes, jefes y concurrentes que terminarían su formación en junio, posibilidad en stand by y que no garantiza la continuidad de todos ni el pase a planta permanente.

No hubo respuestas serias respecto de la centralización del sistema de salud, al plan de contingencia, al salario, las multitareas y el multitrabajo de todo el personal sanitario. Tampoco un compromiso para sostener el canal de reuniones.

Les residentes y concurrentes

Rocío Erre, residente (Tribuna Municipal)

Fuertes denuncias sobre las condiciones del “voluntariado”

Una medida que avanza la pandemia del virus Covid-19, los rumores sobre la obligatoriedad del “voluntariado” de los trabajadores del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires van cobrando mayor peso. Es así como en distintos organismos de la Ciudad están instando a los trabajadores a que se anoten en estos supuestos voluntariados. Teniendo en cuenta la precariedad de las contrataciones, el rol del gremio Sutecha como socio del gobierno y la falta de organización de ATE, los trabajadores se ven sin opciones.

El supuesto voluntariado se dividiría entre distintas tareas sobre las que cuales “podrían elegir los trabajadores”. Se propone, por ejemplo, que se asuman tareas administrativas en hospitales, atendiendo un call center de consultas de la Ciudad de Buenos Aires o en hoteles que alojen argentinos recientemente llegados del exterior.

Lo más preocupante de la situa-

ción es que, cualquiera sea la tarea encomendada, no se garantizan las condiciones de seguridad e higiene para ejecutarlas. Las redes sociales se encuentran inundadas de denuncias por falta de insumos de protección, además del incumplimiento de protocolos, y la ausencia de capacitación para los trabajadores que han visto transformadas sus tareas producto de estos “voluntariados”. Hasta los medios televisivos se han hecho eco de estas denuncias, mostrando cómo mantienen en situaciones deplorables a quienes deben estar en cuarentena obligatoria.

Esta “convocatoria al voluntariado” ha llegado también a profesionales de la Salud Mental, que desempeñan su labor en centros de salud estatales, para que dejen sus tareas en pos de brindar asistencia desde el lobby de estos “hoteles sanitarios”. A estos profesionales se los hace concurrir bajo la recomen-



Cualquiera sea la tarea encomendada, no se garantizan las condiciones de seguridad e higiene para ejecutarlas

dación de que porten su propio alcohol en gel, repartidos en los hoteles, sin esquemas de trabajo claros ni estableciendo protocolos ni recursos suficientes, como lo denuncian los profesionales del Centro de Salud Mental N° 3, donde los pacientes de dicho centro han que-

dado sin personal profesional para ser atendidos por esta reconversión arbitraria de tareas.

Por otro lado, son múltiples las denuncias de aquellos sectores declarados como “esenciales” -es decir, aquellos que desarrollan tareas que no pueden ser interrumpidas. Por

fuimos a fondo en la reunión, exponiendo que no hay improvisación de parte de los trabajadores, sino una clara realidad que se choca con los intereses de clase del gobierno. Frente a derechos laborales, una vianda. Frente a un programa, evasiones. Cabe destacar que el reconocimiento a la Asamblea de la Ciudad es producto de la enorme historia de lucha y organización, que tejimos y que, aunque sea un paliativo, el derecho a la alimentación cubierta por el empleador es un reclamo histórico de les compañeres que forman parte del sostén del sistema de salud. Ningún derecho fue ni será conquistado sino es a través de la lucha, y este es el camino que marca la Asamblea de la Ciudad.

Les residentes y concurrentes seguiremos organizados en asamblea, para exigirle al gobierno una respuesta inmediata a todos los puntos, porque creemos que defendiendo los derechos de quienes hacemos el sistema de salud estamos defendiendo la salud de todos los trabajadores y enfrentando con las mejores armas a la pandemia, que se instala en un sistema que no puede hacerle frente si no es sobre otras bases sociales.

CORDOBA

Schiaretti contra los trabajadores de la Salud

En medio de la pandemia aplican descuentos a quienes se organizan

Con la última liquidación de sueldo, numerosas trabajadoras y trabajadores de la salud de distintos hospitales provinciales sufrieron descuentos en sus recibos de haberes. Y, claro, la novedad es terrible porque a los ya paupérrimos salarios de todo el sector no le sobra ni un peso como para que sean descontados.

Los casos se multiplican en el Neuropsiquiátrico, en el Hospital de Niños y en el Rawson (estos últimos dos hospitales afectados de pleno a la atención de pacientes con Covid-19), así como en otros nosocomios. Justamente, estos son algunos hospitales donde últimamente se han llevado adelante medidas de protestas contra el vaciamiento y la precarización, o pidiendo elementos de protección personal frente al virus o reclamando recomposición salarial.

Schiaretti y Cardozo (ministro de Salud) eligen, de esta forma, perseguir y castigar a los trabajadores de los equipos de salud justo en el momento donde los mismos se encuentran luchando a brazo partido y exponiendo su integridad física para contener la pandemia. Claro está que, en este trabajo de persecución y castigo a quienes reclaman, cuenta con el silencio cómplice de la burocracia sindical del SEP, con Pihén (secretario general del gremio y legislador del PJ) a la cabeza.

Desde Tribuna de Salud repudiamos enérgicamente los

descuentos y la persecución a los trabajadores de la salud que se organizan y luchan. Exigimos la restitución inmediata de todos los descuentos y el cese del hostigamiento por parte del gobierno de Schiaretti.

Levantamos, además, en nuestro programa un aumento salarial de urgencia, que los 5.000 pesos del bono nacional se apliquen al básico para que tenga un incremento mayor en el salario de bolsillo, que no esté atado al presentismo, se sostenga en el tiempo y no sea solo por cuatro meses. Reclamamos, ante un cuadro inflacionario que se espiraliza, la aplicación de la cláusula gatillo nuevamente.

Trabajadores y trabajadoras de la salud: es hora de organizarnos para frenar los atropellos, defender nuestros derechos y nuestro bolsillo. Recientemente en el Hospital de Urgencias, el intendente Llyorya (delfín de Schiaretti) intentó implementar medidas que perjudicaban y ponían en riesgo la salud de los trabajadores. La respuesta fue contundente, con asambleas, denuncias públicas, una carta abierta dirigida a la población y un pliego de reclamos que hizo retroceder esas medidas. Organicémonos por hospital en asambleas, formemos comités de seguridad e higiene que realicen los reclamos y denuncias.

Martín Gamron, médico (Tribuna de Salud - Córdoba)



Viole Ta

Barbijo rojo o feminismo "low cost"

Bajo la cuarentena se sucedieron femicidios cada 12hs. que llevaron estupor a la ya sensibilizada sociedad argentina. Con el asesinato de Claudia en Mar del Plata y de Cristina y Ada en Lanús, la indignación se transformó en reclamos y propuestas.

Horas antes de concretarse la acción, un ruidazo y hashtags en las redes, la ministra de las Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, se presentó mediáticamente con una iniciativa: ordenar a las y los trabajadores farmacéuticos a llamar a las líneas oficiales de emergencia si alguna mujer se presenta frente a ellos pidiendo un "barbijo rojo", señal de que la persona portante del mensaje está en peligro.

La acción propuesta es anodina en estado superlativo y fue pensada para sortear la demanda de acciones concretas. Para presentar la propuesta la Ministra no dio precisiones de que su propuesta hubiese tenido algún tipo de efectividad en algún lado, porque no la tiene.

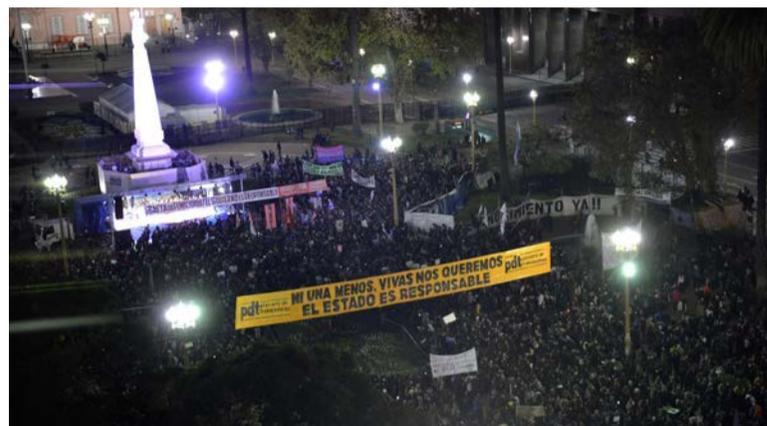
Por el contrario, versiones similares de acciones, todas destinadas a colocar la responsabilidad en las víctimas y no en que el Estado vaya a buscar a las personas que padecen violencia, han sido por demás negativas, porque ante la falta de efectividad se produce un desahucio de las víctimas y una negativa de estas a denunciar.

El botón antipánico, tal como lo administran la justicia y los gobiernos, es otra versión de "barbijo rojo". La iniciativa está en manos de una víctima, que por otra parte ya hizo denuncias y se ve obligada a seguir haciéndolas sin que se modifiquen ni sus condiciones de vulnerabilidad ni nada. No se garantiza el cumplimiento de las perimetrales, las mujeres deben denunciar su violación sin obtener resultados de parte del gobierno o la justicia, hasta que el asesino llega a su víctima y la mata con el botón en la mano. La prórroga de las decisiones judiciales cae en saco roto cuando desde esas instituciones del Estado no se hace nada por detener al violento. Por otra parte el gobierno nacional y los gobiernos provinciales tienen un mapa exacto de la procedencia de las llamadas de auxilio que reciben, esta información resulta fundamental para armar el mapa de la atención y el rescate de víctimas mujeres y niños.

Gómez Alcorta, que se llamó a silencio ante los últimos casos de femicidios, en especial frente al de Fátima Florencia Acevedo en Paraná, por tratarse de la inacción de gobiernos dirigidos por gobernantes del mismo palo que ella, vuelve a desoír a las víctimas en esta ocasión.

Las denuncias están, faltan las respuestas

El caso "barbijo rojo" pretende dar



Reclamamos un plan efectivo para poner en pie la asistencia inmediata mientras dura la cuarentena

una señal de que están faltando las denuncias, sin embargo, solo en la provincia de Buenos Aires, los llamados a las líneas de emergencia crecieron un 60% y la ministra Díaz calcula que el 30% son incrementos genuinos de denuncias de violencia (*Página 12*). Más allá del relato de algunos tips generales, como ser el "reforzamiento" de las líneas de atención, no hay registro en las crónicas periodísticas al respecto de cómo se atienden las emergencias, de qué respuestas van a encontrar las víctimas allí. Apenas algunos ejemplos exitosos de abordaje podrían servir para animar a las mujeres a denunciar aún más. No están en esta sintonía quienes hasta hace poco declaraban una emergencia en violencia de género.

La iniciativa del barbijo rojo representa 0 costo para el Ministerio, no solo una nueva señal a las víctimas de que si no son asistidas es porque ellas no denuncian. Mientras se suman 250 millones de dólares en el pago de la deuda externa, el gobierno transmite un principio fuerte a la sociedad: el pago a un puñado de bonistas está antes que las mujeres, que los trabajadores, que las empleadas domésticas, etc. El Estado transmite estos mensajes a la sociedad mientras que la defensa de las mujeres no pasa de un relato publicitario. La dureza del diagnóstico es proporcional a la seriedad del problema y a la gravedad que reviste para nuestro movimiento de mujeres el uso de nuestra preocupación tan importante.

Pero el barbijo rojo muestra antes que nada una orientación de clase. Mujeres consustanciadas con las problemáticas de género pero que no pueden ser consecuentes con la defensa de las mujeres porque gobiernan para pagar la deuda externa. Aunque se acumula en los relatos de las mujeres que denuncian el problema de la falta de respuesta del Estado o de respuestas que revictimizan y que defienden a los violentos, el Ministerio insiste en no realizar ningún examen sobre la

actuación gubernamental y estatal y en seguir planteando que lo que falta es la denuncia cuando las denunciadas no son escuchadas. Es muy peligroso lo que ocurre.

En este punto se reactualiza una vieja propuesta del PdT al respecto de qué organismos necesitamos las mujeres. Uno financiado por el Estado y autónomo políticamente. Un Consejo Autónomo electo por las propias mujeres desde los 13 años. Los organismos dependiente de los gobiernos tienen como agenda principal pagar la deuda a los usureros. La deuda es con las mujeres proclamamos este Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, una realidad que ninguna pudo refutar.

Reclamamos un plan efectivo para poner en pie la asistencia inmediata mientras dura la cuarentena: que las empleadas domésticas registradas y no registradas cobren todas el subsidio de 10 mil pesos, que se expropien predios de iglesias e instalaciones turísticas para los refugios que se necesitan ya. Que se construyan otros. El gobierno debe entregar ya mismo la información sobre la procedencia de los llamados pidiendo asistencia para poder comenzar por esos lugares a dar las soluciones. Hay que ir a buscar a las mujeres no pedirles más que denuncien para luego no ser escuchadas. Y muy importante, ya mismo debe hacerse un llamado a las profesionales con capacidad para afrontar las cuestiones de género para que sean contratadas para asistir en cada uno de los refugios, con salarios en blanco, con condiciones de seguridad en cada refugio y todo lo necesario para que no sean ellas, otras mujeres trabajadoras muchas también atravesadas por la problemática, las que sean revictimizadas por el propio Estado como ocurre hoy con infinidad de dispositivos. No queremos tercerización en organizaciones o en iglesias.

Vanina Biasi

ITALIA

"La gente tiene hambre": crecen las tendencias a la explosión social

En los últimos días, la prensa internacional dio cuenta de la radicalización de la situación política italiana. Después de los grandes procesos huelguísticos en el norte, y del paro masivo del 25 convocado por la Unión Sindical de Base (USB), comenzaron a producirse saqueos en Palermo, capital de la provincia de Sicilia en el sur. Y existen llamados sistemáticos por las redes sociales a la rebelión popular. Esto se produce en un cuadro de agravamiento de la crisis sanitaria producto del coronavirus. Italia alcanza un total de casi 100.000 infectados y 10.700 víctimas fatales. La brutal emergencia sanitaria se está convirtiendo en una gran emergencia social. A tal punto que "los alcaldes y los servicios de información le advierten al gobierno central: 'la gente tiene hambre'" (*ABC de España*). Los supermercados de la capital de Sicilia ya están custodiados por la policía (*Infobae*, 29/3). Las fuerzas de seguridad, en varias ocasiones, usaron la represión para impedir más saqueos.

Al mismo tiempo, las autoconvocatorias vía Facebook y Whatsapp se multiplican. También se hizo viral un video de un padre con su hija, comiendo un pedazo de pan con Nutella, que le advierte al primer ministro Giuseppe Conte y al alcalde de Palermo: "si mi hija no tiene para comer un trozo de pan iremos a los supermercados" (*ABC de España*). Este video se compartió en todas las redes en pocas horas.

Los saqueos y el llamado a asaltar los supermercados son una señal de la desesperación y de la belicosidad popular, en medio de la crisis. Es importante orientar y traducir esa energía hacia una lucha contra el poder político.

En el sur italiano existe una gran cantidad de trabajadores informales. En esta región, la economía en negro engloba a casi cuatro millones de personas. Con el cierre de todas las actividades económicas no esenciales, dictado tardíamente por el gobierno de Conte, estos trabajadores no obtienen ingresos hace semanas, lo que provoca que la tendencia a la rebelión se agudice hora tras hora.

Sicilia no es el único lugar de Italia donde aumenta la tensión. En Campania, el territorio donde se ubica la ciudad de Nápoles, se han registrado muchos robos a personas que salen de comprar en los supermercados. El alcalde

de Herculano manifestó tener una desocupación del 75% en la juventud.

Desde el norte se extiende un proceso huelguístico por la falta de implementación de la cuarentena en la gran industria. Contra la decisión de mantener abiertos las fábricas no esenciales, los bancos y los supermercados. Es por esto que los trabajadores organizaron cacerolazos en el sur.

El gobierno trata de contener con el anuncio de destinar 400 millones de euros para que los municipios distribuyan cheques de compra o se suministren alimentos a los sectores más golpeados (*Infobae*, ídem). Pero el gobierno es el responsable de no declarar el aislamiento a tiempo por las presiones de las patronales en un cuadro de agravamiento de la crisis mundial. Desde la derecha, el líder de la Liga Norte, Matteo Salvini, está buscando aprovechar la crisis para reposicionarse con un discurso que culpa a China y los inmigrantes por el virus.

Los sucesivos gobiernos italianos, centroderechistas o centroizquierdistas (actualmente, el país es gobernado por una coalición del Partido Democrático y el Movimiento 5 Estrellas), son responsables de realizar, en la última década, un ajuste de 37 mil millones de euros en el sistema de salud italiano. Este recorte provocó un gran deterioro y agravó la diseminación de la pandemia, que hoy cuenta ya con cientos de muertos por día y casi cien mil infectados.

Al mismo tiempo, el gobierno es responsable de cerrar todas las actividades económicas no esenciales sin dar una salida a los trabajadores que de la noche a la mañana se quedaron sin ingresos. En este sentido, el reclamo más importante de este sector, es la extensión del seguro al parado de 550 euros a todos los desocupados. La suspensión de los despidos por dos meses, que tuvo que adoptar el gobierno por la presión obrera, solo abarca a los sectores en blanco. Frente a la gran crisis en curso, sanitaria y económica, está por verse si el gobierno italiano va tener la capacidad de contener la tendencia a la explosión social y la rebelión.

Más que nunca, es necesario el desarrollo de una fuerza revolucionaria que pueda terciar en la crisis y abrir una salida política de los trabajadores.

Leo Furman

El coronavirus y un nuevo capítulo golpista contra Venezuela

Bajo el crítico contexto de la pandemia de coronavirus, que puede afectar particularmente a Venezuela debido al derrumbe de su sistema sanitario, el gobierno norteamericano lanzó este martes un nuevo capítulo de su avanzada golpista, al plantear la salida de Nicolás Maduro del poder y la formación de un gobierno de transición -hasta las elecciones de 2020-, elegido por la Asamblea Nacional, con el consenso de sectores del chavismo y de la oposición, aunque sin el autoproclamado Juan Guaidó en él.

La maniobra apunta a quebrar internamente al gobierno venezolano y a meter una cuña en las Fuerzas Armadas, principal sostén del oficialismo, en el marco de un agravamiento de las sanciones económicas y los ataques a las cabezas del régimen. Lo último en este sentido fueron los cargos de "narcoterrorismo" presentados contra Maduro y la oferta de una recompensa por datos que permitieran capturarlo.

El plan norteamericano, que mantiene su respaldo a Guaidó pero lo excluye de un gobierno de transición, toma nota del fracaso de las intentonas golpistas de 2019 y del cuestionamiento creciente que el autoproclamado presidente despierta en la oposición venezolana, la que, dicho sea de paso, se encuentra fuertemente dividida. Guaidó venía, justamente, de intentar reposicionarse políticamente como líder de ese espacio por medio del planteo de un "gobierno de emergencia nacional", sin Maduro, pero abierto a sectores del chavismo que rompan con él.

Así como Guaidó se presenta a sí mismo como la llave para obtener financiamiento internacional ante la pandemia, Estados Unidos condiciona la liberación de toda asistencia sanitaria (y de un eventual préstamo del FMI) a la puesta en marcha de esta transición golpista. Es un revival de febrero de 2019, cuando el golpismo vino a caballo de una operación de "ayuda humanitaria" desde la vecina Colombia.

Rechazamos estos planteos extorsivos y les oponemos la solidaridad internacional de la clase obrera con el pueblo venezolano y la supervisión de la ayuda humanitaria por parte de



las organizaciones obreras.

La Unión Europea ha marcado algunas diferencias con los planteos de Trump, aunque no abandona el sostenimiento de los golpistas. El jefe de su diplomacia, Josep Borrell, acompañó el pedido venezolano de fondos al FMI ante la pandemia, un reclamo que fue rechazado por el organismo, alegando que Maduro es desconocido por numerosos países. Y la portavoz de la Unión Europea, Virginie Battu, volvió sobre el planteo de una "vía electoral negociada" (*Infobae*, 27/3), condicionando también toda ayuda a un acuerdo previo de gobierno y oposición.

La cuestión venezolana forma parte de un tablero internacional en el que chocan los intereses contrapuestos de las grandes potencias. La última novedad al respecto es la salida del país de la petrolera rusa Rosneft, que habría sido precipitada por las sanciones norteamericanas. La compañía, de mayoría estatal pero con participación privada, dejaría sus negocios en manos de una sociedad controlada enteramente por el gobierno de Vladimir Putin.

Derrumbe sanitario

Venezuela enfrenta la pandemia en un cuadro de derrumbe de su

sistema sanitario y de una profunda crisis social. El gobierno de Nicolás Maduro resolvió declarar el estado de emergencia en el sistema de salud, la cuarentena en todos los estados del país y la suspensión de las actividades no esenciales frente a la propagación del virus, que ya cuenta 113 infectados confirmados (dos muertes) y en ascenso. Sin embargo, se trata de medidas por sí solas incapaces de hacer frente a la pandemia.

El gobierno chavista afronta esta crisis bajo el fuego cruzado de la crisis capitalista mundial, el embargo y las sanciones impuestas por el imperialismo, el vaciamiento sanitario y las necesidades más apremiantes de las masas. El gobierno colombiano, a su vez, ha cerrado las fronteras.

El imperialismo, sin embargo, no puede regocijarse ante este derrumbe porque sus propios sistemas sanitarios se han mostrado completamente incapaces frente a la pandemia.

El sistema de salud venezolano se encuentra estrangulado, producto de los sucesivos ajustes aplicados por el régimen chavista, para garantizar el pago de la deuda externa y para fomentar los negocios de la medicina privada. Esta desfinanciación es evidente cuando obser-

vamos que solo un 1,7% del PBI se destina al sistema público de salud.

Los sindicatos del sector han denunciado la situación de vaciamiento que padecen los hospitales de Venezuela, donde la exigua cantidad de insumos básicos como jabón, guantes, desinfectantes, barbijos o cloro es moneda corriente en todo el sistema sanitario. La Encuesta Nacional de Hospitales, realizada en 2019, indicaba que en el 78% de los establecimientos faltaba agua. Un pantallazo de la magnitud que tiene la crisis sanitaria venezolana nos lo ofrece un informe realizado por un grupo de médicos para Human Right Watch, donde se verifica que el vaciamiento viene de lejos, en 2015 la mitad de los quirófanos del país se encontraban fuera de servicio y que la salud pública estaba atravesada por un 60% de escasez en materia de medicinas e insumos (*The New York Times*, 22/3).

En estas condiciones, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y la Guardia Nacional (GN) patrullan las ciudades de Venezuela, preconfigurando un escenario represivo que ya tuvo expresión en la persecución de periodistas que delataron el estado calamitoso del sistema sanitario, o la detención arbitraria de médicos en la calle. Cabe

señalar que las Fuerzas Armadas siguen siendo el sostén fundamental del gobierno.

El derrumbe del precio del petróleo

El panorama internacional de la crisis capitalista viene a terminar por configurar, junto al coronavirus y el golpismo, un cuadro explosivo para el país bolivariano. El marco es el de un derrumbe generalizado de los precios de las materias primas y la tendencia creciente a la fuga de capitales desde los países atrasados hacia las metrópolis imperialistas. Según medios oficiales, la deuda externa venezolana asciende a la friolera de aproximadamente unos 160.000 millones de dólares (algunos comentaristas afirman que podría ser mayor), y en gran medida se paga a través de la confiscación petrolera por parte de Rusia y China, sus principales acreedores.

Venezuela no es ajena a este sombrío horizonte: el hundimiento del precio internacional del petróleo golpea de manera crítica la economía, ya que la renta petrolera es el principal ingreso de divisas que tiene el régimen bolivariano. La desindustrialización y la primarización características de la economía venezolana han sido profundizadas por la experiencia chavista.

Un programa alternativo para hacer frente a la pandemia

El principal desafío de la etapa para los trabajadores es la necesidad de que intervengan en la escena política como un factor independiente contra el golpismo y la política ajustadora del gobierno de Maduro y para imponer sus reivindicaciones y enfrentar la pandemia: el aumento del presupuesto de salud y la centralización del sistema sanitario, la defensa de los puestos de trabajo, el cese de las actividades no esenciales, condiciones acordes de trabajo en las áreas vitales, así como la democracia en los sindicatos.

En este marco cobra valor la consigna por el no pago de la deuda externa y la lucha contra todo intento del imperialismo yanqui de instaurar un gobierno títere en el país.

Nazareno Kotzev
y Gustavo Montenegro



Suscribite a **Prensa Obrera.com**

Estados Unidos: epicentro de la pandemia y de la crisis mundial

El número de muertos en Estados Unidos por coronavirus ya superó a las víctimas fatales reportadas oficialmente por China. Es el país más afectado por número de casos, a razón de más de 20.000 infectados diarios. El estado de Nueva York es el epicentro de la epidemia, con cerca de 76.000 casos y 1.550 muertos. El principal asesor de salud del país predice que millones contraerán el Covid-19 y entre 100.000 y 200.000 personas morirán.

Las consecuencias económicas y sociales de dicha catástrofe son gigantescas. Se calcula que la contracción de la economía alcanzaría un 25% y hasta un 30%. Una cifra muy superior a la crisis de 2008, en que la economía retrocedió un 10%, sólo comparable con la del crack del '29 y a una velocidad mayor inclusive. Esta situación ha provocado uno de los derrumbes bursátiles más preanunciados en la historia.

Estamos asistiendo al completo descrédito de todas las instituciones políticas del capitalismo estadounidense, que ha demostrado ser incapaz de prepararse o responder a una pandemia -sobre cuyo riesgo muchos especialistas venían advirtiendo previamente-, lo cual, a su turno, aviva todas las tensiones internas.

El régimen político tomado de conjunto ha empezado a crujir, empezando por la relación entre el gobierno federal y los estados en la que se constata una fractura. Cada vez más gobernadores se han ido sumando a la cuarentena, en contraposición con la política de Trump, que venía abogando por aflojar las restricciones en materia de circulación y actividad, así como de distanciamiento social.

El crecimiento exponencial del contagio ha obligado al magnate a pegar un giro y disponer una cuarentena hasta finalizar Semana Santa, el 12 de abril, pero posiblemente sea tarde, después de semanas en que se ha propagado el virus, mientras el magnate venía minimizando la gravedad de la pandemia. No hay que descartar que la conmoción política que se está registrando termine por echar por tierra las expectativas reeleccionistas de Trump.

La crisis política se ve agravada por la denuncias en todo el país sobre la falta de suministros vitales, hospitales inundados, inaccesibilidad de pruebas y médicos. Abundan los informes de caos absoluto en la producción y distribución



Estamos asistiendo al completo descrédito de todas las instituciones políticas del capitalismo estadounidense

de equipos críticos, resultado de décadas de deterioro de la infraestructura social y de salud básica.

El gobernador de Nueva York reclamó 40.000 equipos y apenas recibió 2.000 después de interpecciones sucesivas. Los hospitales Nueva York están desbordados y muchos pacientes han empezado a ser trasladados a otros estados.

Crisis social

La crisis sanitaria va de la mano de la crisis económica y social. El retroceso del PBI traería aparejado un salto mayúsculo del desempleo. Como resultado de la crisis económica de 2008 se eliminaron unos 26 millones de empleos. La crisis actual podría superarlo ese número y en un espacio de tiempo mucho más corto. Lo cierto es que las solicitudes del desempleo en estas últimas semanas ya se acercan a los 4 millones de trabajadores.

Se avecina una ola de quiebras que ya está en curso. Un caso emblemático es el de la renombrada cadena minorista Macys, que acaba de anunciar el despido de 130.000 empleados.

Lo que hay que entender es que no estamos ante una crisis pasajera. El coronavirus empalma con una crisis capitalista previa, que estaba en pleno desarrollo. La economía mundial avanzaba a una nueva recesión. Estados Unidos no escapa de esta tendencia, y eso se constataba con el desinfe que venía sufriendo la actividad económica, que había descendido por debajo del 2%. Wall Street ya había tenido tres temblores a lo largo de 2019, en medio de un enorme en-

deudamiento público y privado. La deuda del gobierno federal, previo al coronavirus ya superaba el PBI norteamericano, en tanto la deuda corporativa ascendía a 16 billones de dólares -o sea, el 75% del PBI- y, por lo tanto, su continuidad estaba en tela de juicio con independencia de la pandemia. Lo que está como telón de fondo es la crisis de sobreproducción y sobreacumulación de capitales que se venía traduciendo en una caída de la inversión, la productividad y la tasa de beneficio. Es probable que muchas de las empresas cerradas debido a la pandemia nunca vuelvan a abrir, con lo cual las tendencias recesivas desemboquen en una depresión.

Esto plantea penurias inauditas para amplios sectores de la población, que tiene como blanco a los trabajadores formales sometidos a la pérdida de sus puestos de trabajo y rebajas salariales, pero con más razón a los trabajadores informales y precarizados. El cierre de actividad no esencial pone en tela de juicio la sobrevivencia de miles de personas que vivían del día a día para acceder a un ingreso o los trabajadores de bajos salarios.

El paquete de rescate

El Congreso norteamericano acaba de aprobar una ayuda económica multimillonaria de 2,2 billones de dólares. Trump se ha apresurado a hacer una gran demagogia destacando la asistencia a los más necesitados. Pero esto no puede encubrir que el grueso de los recursos va dirigido al rescate del capital. Los más de 2 billones de dólares, muy superior al res-

cate bancario de 700 mil millones aprobado en 2008, subestima sustancialmente la escala real de la ayuda del gobierno a las grandes empresas. La mayor porción del proyecto de ley, 500 mil millones para financiar préstamos garantizados a grandes corporaciones, está diseñada para ser apalancada por la Junta de la Reserva Federal en unos 4,5 billones en préstamos y subsidio. Esto equivale a un respaldo prácticamente ilimitado a las con ataduras reales.

La ley asigna 300 mil millones de dólares para pagos directos en efectivo a más de 150 millones de hogares, que recibirán 1.200 dólares por adulto o 2.400 por pareja, más 500 adicionales por cada niño. Este es un subsidio de una sola vez y no incluye trabajadores indocumentados. Además, contempla 250 mil millones de dólares para extender los subsidios de desempleo por 13 semanas y agregar 600 por semana a los beneficios proporcionados por los estados. El subsidio por única vez es concebido por Trump como un recurso pasajero, para descomprimir la enorme presión popular, mientras vuelve a la carga y despeja el terreno para "abrir" el país y obligar a los trabajadores a volver a las plantas y lugares de trabajo, apoyándose en las presiones crecientes que ejerce la clase capitalista.

Por su parte, 500 mil millones de dólares son destinados, a su turno, para financiar los costos de la lucha contra la epidemia de coronavirus y otras necesidades sociales. Sólo se reservan 16 mil millones para que los hospitales adquieran equipos de protección personal y respiradores, suma que ya ha sido denunciada como insuficiente por distintos estados y sectores de la salud.

La disparidad obscena entre los recursos destinados a las empresas y lo que se asignan a los trabajadores afectados y a la salud pública dio lugar a una denuncia encendida por parte de la congresista demócrata socialista, Alejandra Ocasio-Cortez, quien rechazó el proyecto. Esta actitud contrasta con la del senador de Vermont, Bernie Sanders, quien apoyó la ley que fue acompañada por la bancada demócrata. La inclusión de un artículo disponiendo el subsidio del desempleo fue el argumento para respaldar el proyecto, por parte de ambos partidos que, además del salvataje corporativo y a la banca, tiene, en la letra chica, una serie de cláusulas que permiten a las empresas burlar los condicio-

nantes para recibir los beneficios, entre los cuales figura la necesidad de mantener los puestos de trabajo.

Salta a la vista los límites insalvables de la estrategia que enarbola la izquierda demócrata nucleada detrás de la candidatura de Sanders, quien estaría por desistir en su carrera presidencial luego de las nuevas derrotas sufridas en las primarias posteriores al supermartes y que ya ha adelantado su decisión a cerrar filas en el seno el Partido Demócrata y, por lo tanto, apoyar a Biden. El respaldo dado por Sanders al rescate habla de los intereses de clase a los cuales tributa el senador. Esto coloca al rojo vivo la cuestión clave y estratégica de la independencia de clase que, todo indicaría, no es el camino que habrían optado los demócratas socialistas, que habrían decidido no sacar los pies del plato y seguir atados al Partido Demócrata.

Perspectivas

La perspectiva más auspiciosa viene del lado de los trabajadores. Aumenta la frecuencia de huelgas y protestas de trabajadores que exigen protección contra el coronavirus en los últimos semanas (ver nota de *Prensa Obrera*). Enfrentan la voracidad patronal que presiona por reanudar la producción y preservar sus ganancias, aunque eso acelere la propagación del Covid-19 y, por lo tanto, el total de muertos.

El hecho de que sea la principal potencia capitalista del mundo la que tenga el récord de infectados y, muy pronto al paso que va, de muertos es una señal inconfundible del agotamiento histórico de un régimen social. Da cuenta del antagonismo irreversible entre una organización basada en el lucro y la vida, así como de la salud de la población.

La ley fogoneada en común por republicanos y demócratas está muy lejos de movilizar el inmenso poder de la tecnología y la industria, de la infraestructura y recursos existentes de una manera planificada y coordinada para combatir la pandemia, en todos los planos posibles. Es una tarea reservada a los trabajadores norteamericanos y de todo el mundo, que deben plantear sus demandas, como ya lo vienen haciendo en las huelgas y protestas en Estados Unidos, y unir las a la batalla en favor de una salida propia e independiente frente la gigantesca catástrofe económica, social y sanitaria en desarrollo.

Pablo Heller